

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D.C., dos (02) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO No:	11001-33-35-029-2023-00355-00
DEMANDANTE:	ANA MARÍA CRUZ NORIEGA
DEMANDADO:	FIDUPREVISORA – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
CONTROVERSIA:	EJECUTIVO LABORAL

Entra el Despacho a resolver sobre el libramiento de pago en el presente asunto, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

La señora Ana María cruz Noriega, actuando por intermedio de apoderado judicial inicia proceso ejecutivo en contra de la Fiduprevisora – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con ocasión a la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta.

Asimismo, se tiene que el apdoerado de la parte ejecutante mediante memorial radicado el 17 de octubre de 2023, solicita la remisión del proceso ejecutivo (2023-355) de la referencia al citado Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta al considerar que es dicho despacho quien debe adelantar la respectiva ejecución.

En relación con las reglas de competencia para conocer de los procesos ejecutivos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011- modificado por el artículo 30 de la Ley 2080 de 2011, establece la competencia de los juzgados administrativos en primera instancia, precisando lo siguiente:

“Art. 155.-Modificado. Ley 2080 de 2021, art. 30. Los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...).

7. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Subrayado y Negrilla del despacho)

(...).

En este punto de la controversia resulta importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, constituye título ejecutivo:

“Art. 297.- Para los efectos de este Código, constituye título ejecutivo:

- 1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.*
- 2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas dinerarias.*
- 3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que conste obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.*
- 4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”.*

En lo que respecta a la competencia para conocer de los procesos ejecutivos, el mismo cuerpo normativo en su artículo 298 ibídem – modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, establece:

“Art. 298.- Procedimiento. Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.

(...).

De otra parte y, ante los diferentes pronunciamientos respecto a las reglas de competencia aplicables a los procesos ejecutivos antes de la modificación incorporada con la Ley 2080 de 2021, el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011

(vigente antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080), señala las pautas de competencia cuando se pretenda la ejecución de condenas impuestas por esta Jurisdicción, que para el caso debatido son:

*“Art. 156.- Para la determinación de la competencia por **razón del territorio** se observarán las siguientes reglas:*

(...)

*9. **En las ejecuciones de las condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por ésta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva**”.* (Subrayado fuera de texto)

Con respecto a la competencia para conocer de los procesos ejecutivos, el Consejo de Estado en sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020¹, precisó en materia de los procesos ejecutivos cuando el título de recaudo sea de una sentencia proferida por esta jurisdicción o una conciliación aprobada, *“(...) conocerá de la primera instancia del proceso ejecutivo el juez que conoció de la primera instancia del proceso declarativo, con independencia de si la condena fue proferida o la conciliación aprobada en grado de apelación, (...) el criterio de interpretación unificado se aplicará únicamente a los procesos ejecutivos iniciados con posterioridad a la firmeza de la presente providencia”*

La anterior aclaración se efectúa y, teniendo en cuenta que la parte ejecutante en el escrito de la demanda ejecutiva (HECHOS) – precisa que la demanda de nulidad correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, quien negó las pretensiones de la demanda y revocada por el Tribunal Administrativo del Magdalena– sin que allegara la respectiva sentencia en el proceso ordinario, además, se reitera que el apoderado de la ejecutante mediante memorial radicado el 17 de octubre de 2023, solicitó la remisión del presente proceso ejecutivo (2023-355) al Juzgado tercero Administrativo de Santa Marta – indicando que es este Despacho quien debe adelantar la respectiva ejecución.

En virtud de lo expuesto y revisado el Sistema Siglo XXI, no se evidencia que haya cursado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho – en la que actuara como demandante – la señora Ana María Cruz Noriega en contra del FOMAG y la Fiduprevisora S.A. ante el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección tercera. Sala Plena. Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata, Radicado No. 47001-23-33-000-2019-00075-01 (63931)

En este orden de ideas, es claro para el Despacho que el conocimiento del presente asunto está a cargo del juez que profirió la sentencia condenatoria y que, de acuerdo con lo manifestado por el apoderado de la parte ejecutante, para el asunto de autos no es otro que el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta.

En consideración a lo expuesto, esta Sede Judicial declarará la falta de competencia para conocer del asunto y dispondrá **remitirlo al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta**, quien conoció y profirió la citada sentencia en primera instancia.

.

En mérito de los expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que este Despacho carece de competencia para conocer de la demanda ejecutiva incoada por la señora Ana María Cruz Noriega en contra de la Fiduprevisora – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, distinguida con el consecutivo No.11001-33-35-029-2023-00355-00, por las razones anotadas en esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR el proceso a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, para que sea enviado por competencia al **Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta**.

TERCERO. Por Secretaría, déjense las constancias respectivas, líbrense los oficios correspondientes y dese cumplimiento, a la mayor brevedad, a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR

JUEZ

(RYGH)

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy 03 de noviembre de 2023 a las 8:00 a.m.

PARTES	CORREO ELECTRÓNICO
PARTE DEMANDANTE:	mcm2609@hotmail.com